

Jóvenes y violencia en Bogotá: análisis de una problemática focalizada, persistente, pero prevenible

Pablo Alberto Ortega Poveda

3.1. Contexto de la ciudad

Durante esta década, la capital del país se ha convertido en un referente nacional en materia socioeconómica y en seguridad. Bogotá ostenta unas de las cifras más importantes en reducción de los indicadores de pobreza y desigualdad, así como de violencia y criminalidad. Pese a lo anterior, en lo local, persisten nichos de inseguridad, pobreza y marginalidad en los cuales se concentran las principales problemáticas de violencia juvenil. Así mismo, dichas problemáticas se pueden ver afectadas y recrudecidas por la tendencia a un posicionamiento de la ciudad como un lugar cada vez más estratégico para la criminalidad organizada nacional.

3.1.1. Condiciones socioeconómicas

Bogotá es ejemplo de avance en las condiciones socioeconómicas. Si se compara con las demás ciudades de estudio y con el promedio nacional, la capital está muy por encima de ellos en la reducción de la población en situación de pobreza, con necesidades básicas insatisfechas (NBI) y en condición de desempleo.

En efecto, según el DANE, entre el 2002 y el 2013 la capital pasó del 7,1% al 1,6% de la población en situación de pobreza (una reducción del 325%). De igual forma, si se compara con 1993, la ciudad pasó de tener un porcentaje de población con NBI del 17,2% al 9,2% en el 2005. Finalmente, en una década, Bogotá redujo su tasa de desempleo a la mitad (del 14,8% en el

2003 a 7,9% en el 2013). En todos los años de los que se tiene información más reciente, Bogotá reportó mejores indicadores sociales que el promedio nacional y que las ciudades de interés: en el 2013 la población en situación de pobreza a nivel nacional fue 9,1%; en el 2005 el índice NBI del país fue 27,7%; y en el 2013 la tasa de desempleo de Colombia fue 9,2%.

Sin embargo, a nivel territorial, los avances no se han extendido en toda la ciudad. Según la Encuesta Multipropósito de 2011, en 7 localidades se concentran los problemas de pobreza y desigualdad: Ciudad Bolívar, Suba, Kennedy, Usme, Bosa, San Cristóbal y Rafael Uribe. Allí se registra el 77,4% de la población en situación de pobreza en Bogotá, así como las tasas más altas de desempleo y el mayor índice NBI (Bogotá Cómo Vamos, 2014).

3.1.2. Condiciones de seguridad y presencia histórica de GVO

En términos de seguridad es posible destacar dos tendencias importantes en Bogotá: en primer lugar, la persistente focalización de las problemáticas de criminalidad y violencia en zonas específicas de la ciudad; y, en segundo lugar, su posicionamiento como una ciudad cada vez más estratégica para la operación de grupos de criminalidad organizada de mediano y pequeño alcance, tras la caída de los grandes carteles de narcotráfico al final de la primera década del siglo XXI.

Para dar cuenta de lo anterior, es necesario analizar cinco etapas relacionadas con la presencia y actuación de los GVO en Bogotá.

3.1.2.1. Primera etapa (1970 – 1991): incursión del Cartel de Medellín

Desde los 70, las problemáticas de seguridad en Bogotá estuvieron fuertemente asociadas a la presencia y las disputas entre grupos criminales al servicio de mafias esmeraldíferas. Estas organizaciones, provenientes de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta, tuvieron una fuerte participación en la violencia homicida en el marco de acciones sicariales y ajustes de cuentas (FIP, 2013).

Posteriormente, la entrada del Cartel de Medellín a la capital del país, en la década de 1980 condujo a un reacomodamiento de los GVO, dada la fusión de las mafias esmeraldíferas con aquel grupo narcotraficante (FIP, 2013). Esta situación tuvo un doble efecto en la ciudad (CODHES y ACNUR, 2013): primero, incrementó la violencia homicida, que llegó a su punto más alto en el año 1993 en el período 1970-2012, por la doble

guerra que libraban estos grupos, en su ajuste de cuentas interno y en contra del Estado; y segundo, activó y dinamizó a los grupos y redes criminales en zonas focalizadas de la ciudad, asociados al lavado de activos, contrabando, limpieza social, extorsiones, y distribución de drogas al menudeo.

3.1.2.2. Segunda etapa (1990 – 1999): presencia de grupos guerrilleros en la ciudad

Entre finales de 1980 y mediados de la década del 2000 hicieron presencia activa, aunque siempre marginal, grupos guerrilleros como el M19, el ELN y las FARC.

El primero en ingresar a la capital fue el M19. En el marco de los acuerdos de paz con el Gobierno Betancur (1982 - 1986), este grupo organizó campamentos urbanos (p.e. en la localidad de Ciudad Bolívar) en los que funcionaban “ollas comunitarias”, pero donde también reclutaban milicianos e impartían instrucción ideológica y militar a sus células y cuadros políticos (Perea, 2000). Así mismo, el M19 hizo presencia en Corabastos y participó en el asesinato selectivo de delincuentes en zonas marginales de la ciudad (FIP, 2013).

Como resultado del proceso de desmovilización de comienzos de los 90, el ELN y, sobre todo, las FARC coparon los espacios que dejó el M19 en San Cristóbal, Rafael Uribe, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Suba (FIP, 2013).

Para las FARC, Bogotá era central en el plan estratégico hacia la toma del poder que diseñó el grupo en la VIII Conferencia (Torres, 2011). Por ello, desplegó siete frentes guerrilleros y cinco columnas móviles en Cundinamarca y consolidó el corredor Sumapaz – Usme – Soacha - Ciudad Bolívar, incrementando su capacidad operativa cerca de la capital del país (Pérez, 2007). Así mismo, conformó el Frente Urbano Antonio Nariño (FUAN) que operó en la ciudad con el objetivo de realizar acciones militares por parte de las milicias y servir de enlace con las demás estructuras guerrilleras en Cundinamarca (CODHES y ACNUR, 2013).

El ELN, por su parte, hizo presencia mucho menos visible que las FARC con el Frente Urbano Regional Óscar Fernando Serrano Rueda, en la localidad de Engativá, además de las anteriormente mencionadas (FIP, 2013).

La influencia de estos grupos en las dinámicas de violencia en Bogotá fue limitada. Aunque las FARC realizaron retenes ilegales, hostigamientos, amenazas y secuestros en los alrededores de la ciudad; no tuvieron una

participación determinante en los niveles de homicidios (Pérez, 2007). Aún así, estos grupos entregaron armas a los integrantes de bandas criminales y pandillas, de tal forma que potenciaron la capacidad de dichos grupos de ejercer violencia. De hecho, algunas redes criminales trabajaron para las FARC durante los 90 (FIP, 2013).

3.1.2.3. Tercera etapa (1999 – 2004): incursión del Frente Capital de las AUC

Los grupos paramilitares incursionaron en Bogotá con el Frente Capital de las AUC en 1999 y, luego, fortalecieron su posición con la adquisición de la franquicia del Bloque Centauros (del cual hacía parte este frente) por parte del narcotraficante Miguel Arroyave en el 2001. Este grupo tenía como objetivo impedir el acceso de las FARC a Bogotá, desestructurar sus rutas de abastecimiento de material de intendencia y de guerra, y controlar fuentes de financiación de rentas ilegales asociadas al narcotráfico y los mercados de criminalidad de la capital del país (CODHES y ACNUR, 2013).

El posicionamiento de los paramilitares en la ciudad coincidió con el despliegue de las operaciones militares “Aniquilador 1” y “Aniquilador 2” contra las FARC y el ELN por parte de la Fuerza Pública. Estas acciones militares le permitieron al Estado recuperar el control del corredor Sumapaz – Usme – Soacha - Ciudad Bolívar, y aislar al FUAN de los demás frentes guerrilleros (CODHES y ACNUR, 2013). Durante la década del 2000, la Fuerza Pública continuó la ofensiva contra dicho frente guerrillero, dejándolo prácticamente desactivado (Torres, 2011).

Luego de librar una disputa con el Frente República de las Autodefensas Campesinas del Casanare, que terminaría por ganar, el Frente Capital copó los espacios que dejaron las guerrillas en la ciudad, pero, no sólo eso, también se posicionaron en lugares estratégicos donde operaban mercados informales e ilegales⁶ (CODHES y ACNUR, 2013). De igual forma, este grupo infiltró sectores políticos y de la Fuerza Pública, así como también logró reorganizar y controlar las oficinas de cobro que operaban en Bogotá (Torres, 2011).

En cuanto a la capacidad operativa del paramilitarismo en la capital, lo más importante a destacar es la forma como este grupo usó redes criminales locales para el control de mercados, poblaciones y territorios (FIP, 2013). En localidades como Ciudad Bolívar y Bosa, el Frente Capital no operó como una estructura militar regular; más bien, articuló a bandas delincuenciales y pandillas locales que realizaban asesinatos selectivos, amenazas y patrullajes a su encargo, sin ser incorporadas formalmente a su estructura (CODHES y ACNUR, 2013).

3.1.2.4. Cuarta etapa (2004 – 2009): emergencia de grupos posdesmovilización paramilitar

El declive del Frente Capital comenzó en el 2004 con el asesinato de Miguel Arroyave por alias “Cuchillo” y alias “Jorge Pirata”, dos comandantes de frentes del Bloque Centauros que él comandaba (CODHES y ACNUR, 2013). A lo anterior se sumaron la desmovilización de dicho bloque y los resultados operativos exitosos de la Fuerza Pública contra jefes financieros y militares del Frente Capital, lo que debilitó la estructura del grupo (CODHES y ACNUR, 2013).

Sin embargo, es necesario aclarar que el Frente Capital no se desmovilizó y su estructura (conformada por cerca de 450 hombres) permaneció activa (Torres, 2011). De hecho, desde el 2004 emergieron distintos grupos posdesmovilización paramilitar (GPDP) que coparon los espacios dejados por el Frente Capital. Específicamente, en ese período de tiempo se observó en Bogotá a las Águilas Negras, el Bloque Cacique Nutibara, los Héroes de Carlos Castaño y el ERPAC (Torres, 2012). Estos grupos tenían presencia en Kennedy, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar y Corabastos (Torres, 2012).

Los GPDP tienen tres características que vale la pena resaltar: (1) operaban a través de redes criminales que hacían presencia en barrios marginales (CODHES y ACNUR, 2013; FIP, 2013). (2) Bajo el liderazgo del narcotraficante Daniel “El Loco” Barrera, hicieron mucho más selectivas e imperceptibles sus acciones, al tiempo que focalizaron sus zonas de interés, relegando el objetivo de ejercer un control abierto y completo de la ciudad (Torres, 2012); es decir, mantuvieron un perfil mucho más bajo que el Frente Capital (Torres, 2012; CODHES y ACNUR, 2013). (3) Persistieron en el control de mercados ilegales e informales en diferentes puntos de la ciudad; para ello tuvo un fuerte protagonismo el narcotráfico, y se profundizó la activación de redes tanto para el intercambio de armas y drogas, como para el establecimiento de “contratos de prestación de servicios” (Torres, 2012).

3.1.2.5. Quinta etapa (2009 – actualidad): posicionamiento de Bogotá en la criminalidad

La última etapa, en la cual se concentrará el análisis de la violencia juvenil que se realizará a continuación, es una profundización de los procesos que se presentaron desde el 2004. Ellos obedecen a las condiciones actuales de seguridad asociadas al narcotráfico en Colombia y a nivel internacional.

Lo primero está relacionado con las operaciones exitosas que la Fuerza Pública ha realizado desde el 2009 contra los jefes de las últimas grandes organizaciones al servicio del narcotráfico, lo cual llegaría a su punto más alto en el 2012 con la captura de Daniel “El Loco Barrera” en Venezuela

(El Espectador, 2012). A ello se suma al creciente control de las cadenas más importantes del narcotráfico, la introducción y venta en los mercados internacionales, por parte de los carteles mexicanos en detrimento de las organizaciones colombianas (Ávila, 2014).

Ambos hechos condujeron a dos procesos simultáneos: por un lado, la descentralización de las organizaciones criminales al servicio del narcotráfico, dada la emergencia de pequeños y medianos “capos” incapaces de controlar todo el negocio en las ciudades, lo que, a su vez, favoreció la división del negocio entre el “aparato empresarial” y el armado (Ávila, 2014). Por otro lado, la necesidad de estos grupos de criminalidad organizada de diversificar sus fuentes de rentas ilegales, a través de la extorsión o el control de la minería ilegal (Ávila, 2014).

Bogotá no ha sido ajena a estas dos tendencias. Por el contrario, la ciudad ha tomado mayor relevancia para organizaciones criminales de mediano y pequeño alcance, específicamente en lo concerniente a la expansión y profundización de los mercados locales de distribución y expendio de estupefacientes (Ávila, 2014: 35). De hecho, según Ariel Ávila (2014), el leve incremento de los homicidios en la ciudad durante el 2009 correspondía al desplazamiento y expansión de los puntos de expendio y a una corta etapa de reacomodamiento entre organizaciones criminales por el control de este negocio en distintas zonas de la ciudad.

Si bien esto implica un cambio en la tendencia de Bogotá a ser una ciudad poco estratégica para la criminalidad organizada; en la capital del país no se observan grandes grupos armados que se disputen o se hayan aliado para mantener el control de la ciudad, como es el caso de Cali y Medellín, respectivamente (Ávila, 2014; FIP, 2013). Sin embargo, esta situación sí ha tenido un efecto en términos de dinamización y reactivación de bandas y pandillas locales; GVO que tienen una alta participación en la violencia juvenil en la ciudad..

3.1.2.6. Persistencia de zonas focalizadas de violencia en la ciudad

De lo anterior, se destaca la concentración de la violencia y la criminalidad en focos específicos de la ciudad. Esta situación se refleja en una tendencia que inició a mediados de los 90, con el desplazamiento de la violencia homicida del centro a las zonas periféricas (FIP, 2013). Así, según Medicina Legal, aunque los índices de homicidios en Bogotá no han dejado de bajar desde hace dos décadas, persisten altos niveles en Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Bosa, Usme y San Cristóbal (FIP, 2013; Ávila, 2014). Estos niveles han estado fuertemente relacionados con las acciones de grupos y redes criminales (FIP, 2013).

En concreto, es posible agrupar las unidades de planeación zonal (UPZ) donde se concentra la criminalidad y la violencia en seis grandes áreas de la ciudad:

1. La autopista sur y la zona conurbada con Soacha (Cundinamarca) que representan las UPZ de Arborizadora, El Tesoro, Jaime Perdomo y Jerusalén en Ciudad Bolívar; y de Bosa Central, Bosa Occidental y El Porvenir en Bosa.
2. Las UPZ de La Flora (Usme), Los Libertadores (San Cristóbal), Diana Turbay (Rafael Uribe) y Danubio (Usme) que tienen la influencia de la Cárcel Modelo y están ubicadas sobre la autopista al llano; vía que se presta para el tráfico ilegal de armas, municiones y droga (Corporación Nuevo Arco Iris, s.f.).
3. Las UPZ de Corabastos y Patio Bonito (Kennedy). La principal central de abastos de Colombia ha sido un centro de actividades ilegales como contrabando, entrada de droga, armas, etc (Torres, 2011). Allí confluyen grupos criminales y bandas delincuenciales de Patio Bonito y María Paz (Ávila, 2012).
4. La UPZ de La Sabana (Mártires). Esta es una de las zonas céntricas que persisten como altamente conflictivas en la ciudad.
5. Las UPZ de Suba Rincón y Tibabuyes (Suba), en donde se observan asentamientos informales y grupos criminales (FIP, 2013).
6. La UPZ de Verbenal (Usaquén). Allí existe contrabando, venta de drogas y hacen presencia redes criminales desde los 90 (FIP, 2013).

Estas áreas tienen en común tres aspectos: (1) Los peores indicadores socioeconómicos presentados más atrás. (2) Mercados criminales relacionados con la provisión ilegal de servicios de seguridad; el narcotráfico; el tráfico de armas; el contrabando; el lavado de activos, etc. (Ávila y Pérez, 2011). (3) Las principales problemáticas de violencia juvenil (CEACSC, s.f.).

3.2. Análisis de la violencia juvenil

3.2.1. Los jóvenes y la violencia organizada

En Bogotá hacen presencia siete GVO que tienen relación con la violencia juvenil: barras violentas de fútbol, pandillas, bandas criminales, oficinas de cobro, grupos al servicio de narcotráfico, GPDP y grupos de vigilancia

comunitaria. El Gráfico 1 presenta estos grupos conforme a su nivel de organización (alta, media o baja), al tipo de violencia que ejercen (indiscriminada y “rudimentaria” o selectiva y profesionalizada) y a las relaciones que sostienen entre ellos.

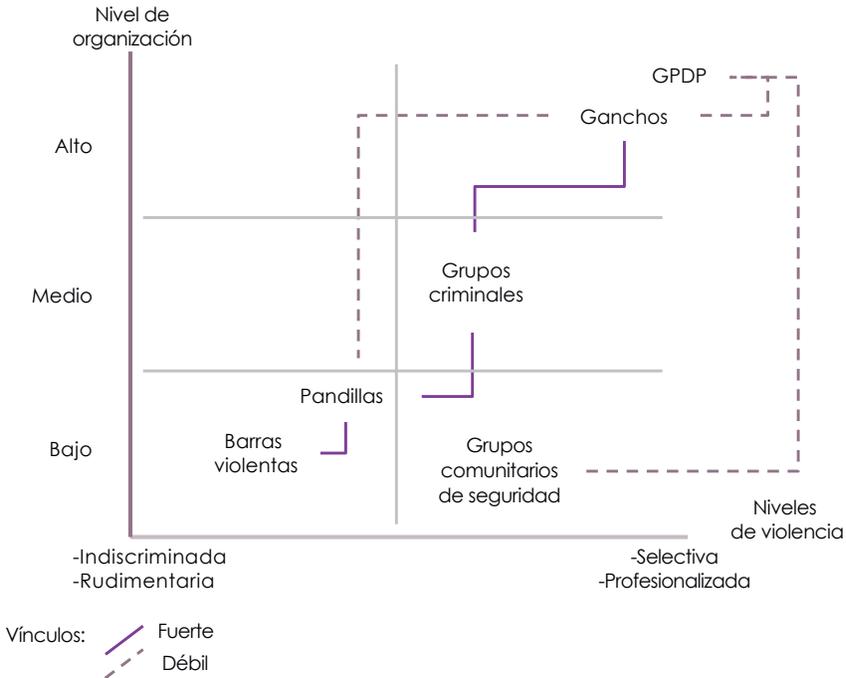


Figura 1. Grupos de violencia organizada en Bogotá (2009 – 2014)

Fuente: elaborado por CERAC

Como se observa en la figura anterior, es posible agrupar los GVO relacionados con la violencia juvenil en la ciudad en tres niveles:

3.2.1.1. Nivel bajo: barras violentas de fútbol y pandillas

Las barras violentas de fútbol y las pandillas son los grupos que tienen mayor relación con la violencia ejercida por los jóvenes en Bogotá. Aunque estos grupos comparten similitudes en torno a su conformación casi exclusivamente juvenil, al bajo nivel de organización de su estructura, y al tipo indiscriminado y rudimentario de violencia que ejercen, son dos organizaciones diferentes.

Las pandillas han sido las agrupaciones juveniles violentas por excelencia en la ciudad. Estos son grupos de jóvenes (entre los 14 y 22 años) que se caracterizan por su participación tanto en enfrentamientos violentos

con otros GVO, como en actividades delictivas (Ramos, 2004 Pesca, et al., 2011).

No se sabe con precisión el número exacto de estos grupos en Bogotá, puesto que los conteos al respecto varían notablemente entre las fuentes; las cifras van desde 1.319 en el 2008⁷ hasta 132 en el 2012⁸. En todo caso, las diferentes mediciones coinciden en que la mayoría de estos grupos se concentran en Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy, Rafael Uribe, y Suba (Ramos, 2003). Así mismo, para autores como Ávila (2014) es posible observar una reactivación e, incluso, un incremento en la actividad de las pandillas desde el 2009, dada la expansión del microtráfico del centro hacia esas zonas periféricas de la ciudad.

En cuanto al primer rasgo característico de estos grupos, se destaca un alto nivel de conflictividad violenta interpandillas y un nivel mucho más bajo de enfrentamientos con otros GVO (Ramos, 2003). La mayor parte de las riñas entre pandillas se originan en agresiones menores y conductas percibidas como desafiantes y que requieren una respuesta violenta por parte de grupos rivales que comparten espacios comunes (Ramos, 2003). En ese sentido, los conflictos y rencillas entre estos jóvenes son tramitados de forma violenta por estos grupos.

La búsqueda de control territorial por parte de las pandillas, mediante la restricción a la movilidad a personas y grupos rivales en zonas específicas de la ciudad también genera disputas entre estos GVO (Ramos, 2003). Estas restricciones, a su vez, afectan a la comunidad; “(algunos) barrios se dividen en sectores, cada sector es manejado por una pandilla, si te pasas por ese sector tienes problemas: te chuzan, te roban, o te pueden matar” (Entrevista 3. Líder juvenil).

Finalmente, varios de los enfrentamientos entre pandillas tienen que ver con la comisión de delitos económicos: ya sea por el robo a un integrante de uno de estos grupos, un familiar o un conocido por parte de una pandilla rival⁹, o por arreglos inequitativos en las ganancias de una acción delictiva en la que participaron de forma coordinada varios grupos (Ramos, 2003).

Según los entrevistados, los pandilleros usan armas blancas en estos encuentros violentos, y sólo en pocos casos usan armas de fuego, lo que por lo general está reservado para los jefes de estos grupos (Entrevista 20. Líder juvenil). Las principales afectaciones que ocasionan estas acciones son golpizas, heridas de gravedad y amenazas, y, con menor frecuencia, asesinatos (Ramos, 2003). Es, precisamente, lo rudimentario y limitado en los recursos para ejercer violencia lo que caracteriza a las pandillas de Bogotá frente a otras formas de GVO.

Las acciones delictivas en las que más se involucran los pandilleros son, sobre todo, hurtos a personas y venta de droga, y en menor medida sicariato, y hurtos a entidades comerciales, residencias y vehículos (Ramos, 2003). Como lo señalaba un líder juvenil entrevistado, las pandillas operan tanto en los barrios donde provienen sus integrantes así como en otros sectores de la ciudad (Entrevista 3. Líder juvenil). En las actividades delictivas, los pandilleros cumplen funciones diferenciadas que se intercambian en cada operación (Perea, 2000).

La estructura de estos grupos es flexible y no se caracteriza por fuertes jerarquías (Ramos, 2004; Perea, 2000). Según un joven exagresor, la pandilla a la que él pertenecía “funcionaba como una corporación, por funciones, o vueltas. Había un líder que era yo, pero no existía una jerarquía” (Entrevista 18). En algunas zonas de Bogotá los líderes son conocidos como “caciques”; son quienes “controlan el microtráfico y la criminalidad (quién roba qué) en el barrio. El cacique es una persona del barrio, ‘el duro’, que logró imponerse y lo domina. Son personas reconocidas por los habitantes de la comunidad” (Entrevista 1. Líder juvenil). Los demás integrantes obedecen sus órdenes: “También existen subordinados; parches juveniles que asumen el rol de ñeros... Estos grupos forman lazos muy fuertes, parecidos a vínculos familiares” (Entrevista 1).

Finalmente, en torno a las pandillas cabe destacar el afianzamiento de los rasgos de lo que Carlos Perea (2000) denominó “nuevas pandillas”: por un lado, una reducción del número de sus integrantes y del espacio territorial que controlan (antes barrios completos, ahora en el mejor de los casos algunas cuadras); y, por otro lado, un incremento en los niveles de la capacidad para ejercer violencia y un mayor involucramiento en actividades delictivas. En parte, el último aspecto tiene que ver con una mayor injerencia en la formación y las actividades de las pandillas por parte de GPDP y organizaciones al servicio del narcotráfico (Ávila, 2014).

Por su parte, las barras violentas de fútbol son grupos de aficionados a un equipo de fútbol, en su mayoría jóvenes, que realizan acciones violentas y algunos de sus integrantes han cometido hechos delictivos (Pesca, et al., 2011). Sin embargo, estas actuaciones no son su rasgo distintivo; los une más la identidad colectiva en torno a su afición deportiva. En ese sentido, si bien estos grupos son altamente conflictivos, sus enfrentamientos se restringen casi exclusivamente con aficionados de equipos rivales y participan en hurtos contra personas y comercio, así como en la venta de estupefacientes, en la mayoría de los casos para financiar su asistencia a encuentros deportivos (Pesca, et al., 2011)¹⁰.

Pese a lo anterior, las barras violentas tienen una fuerte participación en las dinámicas de violencia juvenil en Bogotá. Según varios de los entrevistados,

las restricciones a la movilidad que imponen a grupos rivales¹¹, los enfrentamientos y riñas que sostienen con armas blancas y piedras, y los actos vandálicos que ejercen están entre las principales problemáticas de seguridad y convivencia en Kennedy, Tunjuelito, Bosa, Suba, Usme, Usaquén y Ciudad Bolívar. Para un líder, “Las barras son percibidas como las nuevas pandillas”, dada su participación en dinámicas violentas y delictivas que afectan a las comunidades (Entrevista 21).

En cuanto a su estructura, las barras violentas mantienen un patrón similar a las pandillas; existen liderazgos muy fuertes y reconocidos, conocidos como “capos”, pero es una organización flexible, como lo señala el testimonio de una líder juvenil entrevistada: “existe jerarquía, siendo el capo el que da la orden, pero no pasa nada si uno de los miembros la desobedece” (Entrevista 7). Aunque los barristas ingresan voluntariamente a estas agrupaciones, se involucran en dinámicas violentas; “Los jóvenes entran por identidad pero terminan viéndose inmersos dentro de la lógica violenta de las barras, donde para escalar dentro de la jerarquía en ocasiones es necesaria la violencia” (Entrevista 5. Líder juvenil).

Para terminar, estos grupos tienen en común su relación con la comunidad, la respuesta de la Fuerza Pública, y la participación de mujeres en estos grupos.

En cuanto a lo primero, la relación entre jóvenes agresores y comunidades es muy conflictiva. En parte, esto se debe a la notable desconfianza en “doble vía” que se observa entre los jóvenes y los “adultos” en los barrios donde se concentran las problemática de violencia juvenil. Por parte de los jóvenes, su desconfianza tiene que ver con la percepción que tienen de la presunta participación de varios sectores de la comunidad en campañas de “limpieza social”; así como en la tendencia en los jóvenes a demostrar un rechazo frente a instituciones formales como la familia, el colegio, el Estado, etc. (Pesca, et al., 2011).

Por parte de los adultos, existe un alto nivel de estigmatización en un gran sector de la población frente a los jóvenes que frecuentan y se reúnen en gran número en sitios públicos, consumen drogas, practican deportes extremos, y pertenecen a culturas urbanas (Entrevista 14. Funcionaria; Entrevista 95. Funcionario)¹². En ocasiones, ello ha conducido al cierre de espacios formales de participación para los jóvenes, como las juntas de acción comunal (JAC) (Entrevista 1. Líder juvenil).

Aún así, la relación entre jóvenes agresores y adultos es compleja. Si bien la comunidad rechaza las acciones de pandillas y barras violentas, el nivel de denuncia de estos hechos es muy bajo¹³ (Entrevista 1. Líder juvenil). En parte, esto se debe a la desconfianza ciudadana frente a las

autoridades estatales; al hecho que algunos pandilleros se presentan como los ‘protectores del barrio’; y los lazos de familiaridad de estos jóvenes con las comunidades¹⁴.

Sin embargo, muchas de las “tensiones generacionales” y los conflictos entre “adultos” y jóvenes agresores se tramitan de forma violenta. Según Ramos (2003) y Pesca, et al., (2010), las pandillas también sostienen enfrentamientos con vecinos del barrio, celadores, comerciantes y miembros de JAC, así como con grupos de vigilancia comunitaria (de quienes se hablará más adelante). Contrario a la percepción general, Ramos (2003) encontró que en estos enfrentamientos resultan mucho más afectados los jóvenes agresores que los pobladores.

Recuadro 1. Grupos de vigilancia comunitaria

Otros grupos que tienen incidencia en la violencia juvenil son las agrupaciones de vigilancia comunitaria, que operan en zonas marginales, y son conformados por pobladores que ejercen violencia contra “la delincuencia”, y sectores estigmatizados de la población (Ramos, 2003). En los barrios son conocidos como paramilitares, no obstante son más cercanos a una expresión de “autodefensa” comunitaria frente a las fallencias estatales en la provisión de seguridad¹⁵ (Perea, 2000).

Estas agrupaciones no “encajan” en ninguno de los niveles de la estructura criminal: tienen un nivel bajo de estructura organizativa, caracterizado por su conformación esporádica y clandestinidad; pero ejercen violencia selectiva y, es posible, que reciban apoyo de GPDP y de agentes estatales (Ramos, 2003). Su participación en la violencia juvenil está restringida a campañas de limpieza social contra jóvenes.

Por su parte, la relación entre jóvenes y autoridades estatales es negativa. En casi todas las entrevistas se reportó un trato agresivo y abusivo de la Policía contra los jóvenes y una notable desconfianza de estos últimos frente a los primeros. Ello explica por qué en zonas como Ciudad Bolívar y Usme algunas pandillas y barras se enfrentan a la Policía como si fuera un GVO más “La Policía en las áreas rojas no entra, ya que cuando entra son rechazados por los jóvenes por medio de pedreas o asonadas” (Entrevista 3. Líder juvenil); “Hay zonas de Usme donde la Policía agrede a los jóvenes y ellos responden” (Entrevista 11. Líder juvenil).

Finalmente, también participan mujeres en estos grupos, y ese fenómeno parece que no es novedoso (Perea, 2000). Según Carmen Torres-Castro (2013), es posible encontrar en Bogotá pandillas “mixtas” y pandillas exclusivamente femeninas (aunque muy escasas)¹⁶. Las jóvenes agresoras no

sólo ejercen el rol de “compañeras”, novias o amantes de los integrantes de estos grupos; también participan directamente en actos delictivos, sobre todo en el hurto a mano armada; auxilio de heridos; transporte y envío de armas, droga y mensajes (Pesca, et al., Torres-Castro, 2013)¹⁷. Así mismo, participan en enfrentamientos con otras integrantes de grupos rivales (Entrevista 1. Líder juvenil¹⁸).

3.2.1.2. Nivel intermedio: bandas delincuenciales y oficinas de cobro

Los grupos de crimen organizado tienen una participación significativa en la violencia juvenil; no sólo por la participación de jóvenes en estos grupos, sino sobre todo por la violencia que ejercen contra jóvenes, agresores o no.

Las bandas delincuenciales (p.e. Los Pascuales o Los Luisitos) son los GVO más cercanos a los grupos del nivel anterior e, incluso, según Ramos (2003) operan como modelos de referencia para los pandilleros. Sin embargo, estos grupos se diferencian de las pandillas y las barras violentas en tres aspectos: primero, sus integrantes se unen exclusivamente para capturar rentas a partir de la comisión de delitos; robos de mayor cuantía (al transporte público, al comercio), falsificación, contrabando, extorsión¹⁹ o tráfico de drogas (Ramos, 2003; Perea, 2000). En otras palabras, las bandas dejan de lado aspectos identitarios que son centrales para la cohesión de los grupos juveniles violentos que se abordaron atrás.

En segundo lugar, el nivel de violencia de las bandas es más “profesionalizado” y selectivo. Estos grupos usan armas de fuego en las acciones violentas en las que se involucran, pero tratan de restringir el uso de la violencia a casos extremos, como ajustes de cuentas internos (Ramos, 2003). Lo anterior tiene que ver con el interés de estos grupos de mantener un “bajo perfil” público (Perea, 2000).

Por último, su estructura organizativa es mucho más sofisticada: tienen una división clara de funciones, que les permite reemplazar a sus integrantes con facilidad, y tienen líneas de mando más consolidadas que las pandillas (Ramos, 2003). Estos grupos, entre los que se encuentran “oficinas de cobro”, tienen, además, fuertes vínculos con los GVO del nivel alto, y relaciones con sectores políticos, económicos y de la Fuerza Pública de la ciudad (Torres, 2010)²⁰.

Si bien se observan jóvenes vinculados a bandas (Torres, 2012), la relación que tienen estos grupos con la violencia juvenil es en su rol de victimarios (FIP, 2013). Las bandas suelen tener enfrentamientos con las pandillas, sobre todo, por alianzas mal logradas en la comisión de delitos económicos coordinados entre ambos grupos y por el control del territorio, cuando las

pandillas atraen la atención de la Fuerza Pública o de otros GVO (Ramos, 2003). En este tipo de hechos, los principales afectados tienden a ser los pandilleros (Ramos, 2003).

3.2.1.3. Nivel alto: “Ganchos” y GPDP

En la cima de la cadena criminal en Bogotá están las organizaciones al servicio del narcotráfico, denominados en la ciudad como Ganchos, así como los GPDP.

En cuanto al primer grupo, los resultados operativos exitosos de la Fuerza Pública contra el expendio y la distribución de droga en el centro, primero en El Cartucho (2002), y recientemente en la calle de Cinco Huecos (2010) y el Bronx (2012), explican el proceso de descentralización y expansión de los Ganchos encargados de este negocio del centro a las periferias de la ciudad (Ávila, 2014).

Según la Policía, 22 Ganchos operan con 73 redes criminales en diferentes zonas de la ciudad, en el expendio y distribución de droga, así como de la realización de crímenes como extorsiones, hurtos y homicidios (El microtráfico: guerra por las ‘ollas’, 2012). Las localidades donde se reporta un mayor número de sitios dedicados a la venta de droga coinciden con las zonas focalizadas de violencia juvenil²¹ (Marín, 2014).

Los grupos al servicio del narcotráfico tienen una estructura en red altamente sofisticada, en la que se observan los siguientes roles: proveedor de armamento; asesor financiero; asesores jurídicos; jefes de zona; jefes de seguridad o sayayines (cerca de 15 en cada grupo); administradores por cada sustancia; contador en bodega; taquilleros; y expendedores (Así se lucha contra el microtráfico y las ‘ollas’ en Bogotá., 2014). las bandas, los Ganchos usan violencia selectiva para regular disputas, al tiempo que priorizan la construcción de relaciones de cooperación o connivencia con agentes estatales por medio de prácticas de corrupción (Ávila, 2014).

Según Ávila (2014), la expansión de los Ganchos hacia la periferia de la ciudad ha estado acompañada por un incremento en la subcontratación de bandas y pandillas por parte de estas organizaciones. En ese sentido, en campo se reportó lo siguiente: “Las actividades que ejercen los jóvenes principalmente son las del microtráfico en las ollas, siendo los que trafican la droga y la venden” (Entrevista 2. Lideresa juvenil); “Hay jóvenes involucrados en el expendio de droga; algunos trabajan como mensajeros, pero en algunos casos jóvenes ‘sanos’, que no tienen nada que ver con este negocio, son obligados a llevar encargos con droga de un punto a otro” (Entrevista 96. Funcionaria).

Por lo general, los jóvenes que se involucran en el microtráfico ejercen el rol de campaneros, intermediarios, y transporte o correos humanos. El resto de funciones, como la “taquilla”, la administración del expendio y la provisión de seguridad, la controlan los Ganchos o grupos armados (Defensoría del Pueblo, 2013). Por ello, algunos entrevistados resaltaban que “Los jóvenes son los que manejan el microtráfico pero no controlan el negocio” (Entrevista 14. Funcionaria).

Las mujeres también participan en el microtráfico. Según un líder entrevistado, en zonas como Patio Bonito (Kennedy) este negocio:

(...) es delegado, en su mayoría a jóvenes mujeres entre los 13 y 20 años que andan en bicicleta por toda la zona vendiendo sustancias. Esta estrategia probablemente se deba a que las mujeres son menos propensas a ser capturadas, y la acción policial de igual forma va a ser más medida y controlada con ellas. (Entrevista 21)

Una situación similar se identificó en Usme (Entrevista 95. Funcionario) y Bosa (Entrevista 5. Líder juvenil).

Por su parte, GPDP, como Las Águilas Negras y Los Rastrojos, hacen presencia en zonas muy restringidas y periféricas de Bogotá, específicamente en las UPZ conurbadas con Soacha (Cundinamarca) en Ciudad Bolívar y Bosa (Defensoría del Pueblo, 2013)²². Así mismo, en las entrevistas realizadas en Usme se reportó que en un asentamiento ilegal de esta localidad, conocido como Tocaimita, opera un GPDP no identificado (Entrevista 11. Líder juvenil; Entrevista 95. Funcionario).

Igual que los Ganchos, los GPDP operan en red y ejercen un control indirecto sobre los territorios y poblaciones en los que tienen influencia mediante la contratación de grupos criminales y pandillas locales (Defensoría del Pueblo, 2013). Según Iván Torres (2010), en los barrios fronterizos de Bogotá y Soacha, los GPDP han utilizado bandas y oficinas de cobro que demuestran capacidad de ejercer dominio territorial y poblacional, acceso a fuentes de financiación ilegal, y reclutamiento de nuevos integrantes (en particular, jóvenes)²³.

En algunos casos las pandillas también son utilizadas por GPDP. Para un líder entrevistado, “Muchas pandillas están organizadas o patrocinadas por los paramilitares porque es una forma visible de control territorial: Los grupos paramilitares le pagan a líderes pandilleros para que controlen el barrio, pero detrás hay una red de narcotráfico y paramilitarismo” (Entrevista 1).

En particular, los GPDP tienen incidencia en la violencia juvenil tanto por la participación de jóvenes en estos grupos, mediante el reclutamiento forzado, como por el ejercicio de asesinatos y amenazas de jóvenes en el marco de campañas de limpieza social (que se abordarán más adelante). Los jóvenes involucrados en GPDP actúan como vigilantes, mensajeros, vendedores de droga, cobradores de extorsiones, y participan directamente en acciones violentas en la modalidad de sicariato (Defensoría del Pueblo, 2013). De igual manera, mujeres y niñas son usadas para el transporte de armas y droga (Defensoría del Pueblo, 2013).

Por último, los GVO del nivel alto han favorecido el incremento de la conflictividad y la capacidad de ejercer violencia de los GVO juveniles. Esto se debe no sólo a la entrega de armas a bandas y pandillas, sino también al poco control que ejercen sobre estos grupos. Si bien en la parte “alta” de la estructura criminal se establecen acuerdos de “no agresión” entre los grupos, para no llamar la atención de las autoridades y maximizar la obtención de rentas (Defensoría del Pueblo, 2013), en la parte “baja” los GVO tienen autonomía, llevan a cabo procesos de expansión y se involucran en disputas con grupos similares.

Recuadro 2. Zonas de disputa entre GVO del nivel bajo en Bogotá

1. Usaquéen (El Codito y Santa Cecilia): incremento en el número de pandillas, y conflictos entre bandas de mediano alcance, que tienen articulaciones con pandillas locales, por el control de microtráfico, extorsiones y robos (Ávila, 2014; FIP, 2013).
2. Suba (El Rincón y La Gaitana – Lisboa - Bilbao): enfrentamientos armados entre pandillas y parches con redes criminales que manejan el expendio de droga (FIP; 2013).
3. Kennedy (Chucua de La Vaca, María la Paz y ronda del río Bogotá): alquiler de armas, expendio de droga y enfrentamientos por el microtráfico de droga entre pandillas, parches, distribuidores y expendedores de narcóticos (FIP; 2013).
4. Ciudad Bolívar: “Los grupos dedicados al microtráfico se apropian de determinada zona y empiezan a granear el tráfico de drogas, lo cual lleva a que se generen enfrentamientos violentos” (Entrevista 15. Líder juvenil).

Es posible identificar cinco tipos de situaciones críticas de violencia contra jóvenes en Bogotá: (1) asesinatos y amenazas en el marco de acciones de limpieza social; (2) agresiones físicas y restricciones a la movilidad ocurridas en el marco de enfrentamientos entre pandillas, bandas criminales y barras violentas; (3) reclutamiento forzado de jóvenes, y vinculación y uso ilegal de menores de edad por parte de grupos armados; (4) explotación sexual de niñas y mujeres jóvenes; y (5) detenciones arbitrarias y agresiones físicas por parte de agentes estatales.

3.2.2.1. Afectaciones por limpieza social

El tipo de violencia que más afecta a los jóvenes de las zonas marginales de Bogotá son los asesinatos y las amenazas que se realizan en el marco de campañas de “limpieza social”. Estos hechos afectan la vida e integridad de los jóvenes víctimas, así como generan miedo y restringen la libre personalidad de los demás jóvenes (Ramos, 2003; Entrevista 1. Líder juvenil)²⁴.

Las campañas de limpieza social son un fenómeno difícil de caracterizar dada la multiplicidad de actores e intereses que intervienen en él.

En primer lugar, se observa la participación de sectores de la comunidad en estas acciones; en particular, JAC, comerciantes y otros líderes barriales. En efecto, esto fue confirmado por la mayoría de entrevistados en que se reportó la problemática de la limpieza social en el trabajo de campo. En concreto, la comunidad participa en la limpieza social, ya sea como autores intelectuales de los hechos, mediante la elaboración de los listados de las víctimas o a través de la entrega de información que permita reconocerlas; o como ejecutantes directos de las acciones a través de los grupos de vigilancia comunitaria (Perea, 2000).

Al menos, tres factores explican la propensión de un sector de la comunidad a apoyar, realizar o justificar estos hechos: (1) la estigmatización de la juventud en estos lugares²⁵ (Torres, 2010); (2) la afectación efectiva de los habitantes por parte de pandillas o bandas mediante robos o extorsiones, lo que vulnera seriamente la reproducción material de los hogares y genera serias tensiones en la población (Ramos, 2003); (3) La percepción de incapacidad o tolerancia de la Fuerza Pública frente a la criminalidad por parte de los pobladores.

En segundo lugar, autores como Perea (2000) han identificado la injerencia de integrantes de la Fuerza Pública en las campañas de limpieza social, lo cual también se recogió en terreno (Entrevista 5. Líder juvenil; Entrevista 20. Funcionario). Para Leandro Ramos (2003), en parte, ello se debe a la desconfianza en la capacidad de sanción del sistema judicial entre quienes

participan en estos hechos. La limpieza social termina siendo para dichos agentes estatales una especie de “solución final” a una serie de trasgresiones que no se pueden reprimir por los medios legales (Ramos, 2003)²⁶.

Finalmente, también participan en estos hechos GPDP²⁷, bandas y oficinas de cobro. Los dos últimos grupos tienden a ser los autores materiales de los hechos, dado que de allí provienen los sicarios contratados para ejecutar los asesinatos (Perea, 2000). Por su parte, el papel de los GPDP evidencia la complejidad del aparato criminal que opera en la realización de estos hechos. Según Torres (2010), en Ciudad Bolívar, Bosa y Altos de Cazuca (Soacha), los GPDP (y antes los paramilitares), proveen lo necesario para realizar las acciones de limpieza: (1) los intermediarios que se ponen en contacto con las JAC y los comerciantes; (2) las relaciones con el mercado del sicariato; y (3) el discurso que legitima y hace “necesario” el uso de la violencia para la solución de conflictos locales, a través del asesinato de los jóvenes considerados como “indeseables”.

En canto a las víctimas, se observan tres perfiles de jóvenes:

En primer lugar están los integrantes de GVO y consumidores de drogas (Pesca, et al., 2010; Entrevista 6. Líder juvenil). En particular, es preocupante la situación en Usme:

Entre 2011 y 2013 se presentó una serie de asesinatos selectivos de jóvenes que estaban involucrados en la venta y el consumo de sustancias psicoactivas por parte de desconocidos en la UPZ La Flora (...) De dos meses para acá, volvieron a presentarse 9 asesinatos de jóvenes relacionados con el tráfico de drogas (Entrevista 95. Funcionario público)²⁸.

En segundo lugar, la limpieza social también ha sido usada por GPDP para asesinar a militantes de izquierda, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios, muchos de ellos jóvenes, quienes por su labor podrían dificultar el accionar de estos grupos (Torres, 2010). En ese sentido, la Defensoría del Pueblo (2013) denunció que las Águilas Negras y Los Rastrojos asesinan a jóvenes y otras personas con esos perfiles en Bosa y Ciudad Bolívar con el objetivo de influir en las solicitudes de la comunidad en torno a la legalización de predios informales y neutralizar las denuncias ciudadanas en torno a las afectaciones a la seguridad y la convivencia que estos grupos generan. Corroborando lo anterior, se recogieron testimonios sobre el asesinato reciente de líderes juveniles en estas localidades. En Ciudad Bolívar, un líder señalaba: “Grupos paramilitares, como Las Águilas, realizan estas acciones, posiblemente con apoyo de la Policía y el Ejército. A otro amigo, Carlos, lo asesinó la limpieza y él era un líder social. No se entiende el modus operandi” (Entrevista 1)²⁹. En Bosa “Se presentan

también situaciones de limpieza social ligada con tendencias políticas de los jóvenes y asesinatos selectivos” (Entrevista 5. Líder juvenil).

Finalmente, muchos jóvenes son asesinados tan sólo por estar en el sitio y lugar de los hechos en el momento “equivocado”. Así, se evidencia el carácter indiscriminado en la afectación a los jóvenes que pueden tener estos hechos. No obstante, los grupos que realizan estas acciones tratan de legitimarlas, señalando que las víctimas son “(...) ‘drogadictos’, ‘vagos’ o ‘delincuentes’; como amenaza o personas indeseables, para generar en la población una ‘sensación de desesperación’ que haga ‘necesaria’ la oferta de ‘servicios de seguridad’ estables, sólidos y duraderos como los que ellos ofrecen” (Torres, 2010, p.47).

Gran parte de estos asesinatos son precedidos por panfletos amenazantes, listas de eventuales víctimas y amenazas directas contra jóvenes emitidos por GPDP y desconocidos. Por lo general, en esas misivas se restringe el horario de movilidad de los jóvenes “no se quieren a jóvenes después de cierta hora porque se mueren (...) si no acuestan a sus hijos temprano nosotros se los acostamos”; se amenaza a otros sectores estigmatizados, “ (...) ni homosexuales, ni borrachos”; y se señala el supuesto apoyo de parte de la población a estos hechos, “(...) los comerciantes se organizaron para pedirles a ellos que los defendieran, porque la Fuerza Pública no es capaz de hacerlo” (Entrevista 1. Líder juvenil).

Así mismo, en las entrevistas se reportó que, incluso, algunas de estas amenazas han ido dirigidas contra la comunidad académica de colegios públicos (Entrevista 12. Funcionario público), y contra organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, particularmente en Usme (Entrevista 95. Funcionario).

Por último, la limpieza social afecta a todos los jóvenes de estas comunidades y no sólo a las víctimas directas, en tanto generan miedo y afectan su libre personalidad de estas personas. Al respecto, un líder señalaba: “¿A quién le tenemos miedo: a los paramilitares, al Ejército, que para nosotros son los mismos paramilitares, o a la Policía, que parece que la DIJIN organiza los mismos grupos de limpieza; y para nadie es un secreto que los grupos comunales participaron en una época en la limpieza? ¿A quién le tengo miedo?” (Entrevista 1).

3.2.2.2. Afectaciones por violencia entre pandillas, bandas criminales y barras violentas

Gran parte de los hechos de violencia contra jóvenes se enmarcan en los enfrentamientos y las acciones de los GVO del nivel bajo y medio,

especialmente las barras y pandillas, en los que tienen mayor participación los jóvenes.

Como se mencionó anteriormente, las pandillas establecen restricciones a la movilidad (fronteras invisibles) entre barrios y agreden físicamente o asesinan (en algunos casos) a quienes cruzan estos límites territoriales: “Por ejemplo, a cierta hora no es posible cruzar de Sierra Morena a Perdomo. Hay peleas cuando alguien lo hace; una vez un amigo lo hizo y fue apuñalado”. Estas fronteras operan en horarios específicos: “las fronteras no funcionan todo el día, suelen hacerlo más en las noches” (Entrevista 1. Líder Juvenil).

Los jefes pandilleros imponen estas restricciones:

Las fronteras son establecidas, en muchos casos, por los caciques que controlan el barrio; ellos tienen el control del microtráfico de drogas y de la criminalidad (...) Los líderes de cada barrio establecen esos acuerdos: ‘usted no se meta acá y yo no me meto allá’. (Entrevista 1. Líder juvenil)

Así, buscan garantizar exclusividad sobre el mercado de drogas y la criminalidad en un territorio:

Esas fronteras están relacionadas con el microtráfico de drogas y con una lucha de poder; los líderes defienden su barrio. Las fronteras se crean por ese juego de poder para evitar los conflictos; los líderes defienden que nadie se meta a robar a un barrio sin su permiso. (Entrevista 1)

Los enfrentamientos entre pandillas también afectan a los jóvenes de las comunidades. Así, en Usme, un funcionario entrevistado señalaba:

En la UPZ de Danubio se han presentado enfrentamientos con armas blancas entre dos pandillas. Debido a estos hechos se han presentado 3 ó 4 asesinatos y el desplazamiento de varias familias por cruzar un territorio. Los enfrentamientos están relacionados con el ‘respeto’ por el territorio y afectan a los barrios aledaños al colegio Paulo Freire. (Entrevista 95)

Así mismo, las barras violentas establecen límites territoriales que operan como “fronteras entre fronteras”, dado que sólo restringen el acceso de los hinchas del equipo rival y no de toda la población (Entrevista 1. Líder juvenil). Cuando hinchas de otro equipo ingresan a estos territorios, en ocasiones marcados por las barras, se generan enfrentamientos con armas

blancas, palos, piedras y, en menor medida, armas de fuego (Entrevista 12. Líder juvenil)³⁰. Estas acciones van dirigidas principalmente contra los integrantes de las barras, no obstante, por el carácter indiscriminado de este tipo de violencia pueden resultar afectados hinchas que no son agresores, así como el resto de habitantes de la comunidad que queda en medio de los enfrentamientos (Entrevista 7. Lideresa juvenil).

Finalmente, en campo se reportó que existen fronteras entre barrios que no están relacionadas con los GVO sino con conflictos entre los pobladores, que en algunos casos involucran a los jóvenes, ya sea como víctimas o como agresores en el marco de la “defensa” de esos territorios (Entrevista 95. Funcionario).

3.2.2.3. Reclutamiento forzado

Otra situación crítica de violencia contra los jóvenes es el reclutamiento forzado, y la vinculación y uso ilegal de menores por parte de bandas, Ganchos y GPDP.

Según la Defensoría del Pueblo (2013), en Bosa y Ciudad Bolívar, jóvenes entre los 18 y 26 años, y menores en edad escolar (11 - 18 años)³¹, estarían siendo víctimas de reclutamiento forzado por GPDP como Los Rastrojos y las Águilas Negras. Así mismo, de acuerdo con una funcionaria entrevistada, esta situación se presenta en los bordes de San Cristóbal y Suba³², y, al parecer, “La estrategia consiste en identificar a la población vulnerable y los jóvenes considerados como ‘problemáticos’ o más arriesgados para reclutarlos” (Entrevista 22). De igual forma, un líder entrevistado señalaba que en localidades como Ciudad Bolívar, algunos grupos de vigilancia comunitaria reclutan jóvenes forzosamente (Entrevista 1).

Los GVO reclutan a los jóvenes mediante diferentes mecanismos (Defensoría del Pueblo, 2013): (1) la inducción a la drogadicción; (2) la entrega de alimentos, artículos de valor y pequeños regalos para construir lealtad y confianza en los jóvenes; (3) el pago de sumas de dineros; y (4) la violencia³³.

3.2.2.4. Explotación sexual de mujeres y niñas

En las zonas focalizadas de violencia juvenil se identificaron casos de violencia sexual contra mujeres jóvenes y niñas.

Según la Defensoría del Pueblo (2013), en Bosa y Ciudad Bolívar, integrantes de redes de criminalidad de los GPDP inducen y/o constriñen a mujeres entre los 12 y 20 años a la prostitución, trata de personas, pornografía

infantil y turismo sexual. Al respecto, según un líder entrevistado, en la última localidad se observan casos de

(...) trata de blancas; llegan los viernes a ciertos colegios camionetas 4X4 y recogen a un grupo de niñas, y regresaban a la otra semana con ropa nueva y celulares de alta gama. Cuando llegaban incitaban a las demás muchachas a caer en estas prácticas. Se dice que detrás de eso están los paramilitares (Entrevista 3).

Las víctimas de estos hechos son inducidas a prostitución forzada mediante cuatro modalidades (Defensoría del Pueblo, 2013): (1) la entrega de dinero; (2) el ofrecimiento de mejores condiciones de vida; (3) la intimidación y las amenazas; y (4) la inducción a la drogadicción.

Así mismo, en estas zonas operan redes de proxenetismo: las menores inducidas, que usualmente son contactadas en colegios públicos, son obligadas a llevar a 2 ó 3 nuevas víctimas, ofreciéndoles la oferta de servicios sexuales a cambio de dinero (Defensoría del Pueblo, 2013; Entrevista 2. Líder juvenil).

3.2.2.5. Afectaciones por violencia de la Fuerza Pública

Las detenciones arbitrarias, las amenazas y las agresiones físicas de jóvenes por parte de agentes estatales, especialmente la Policía, es el tipo de violencia no letal más común reportado por las personas entrevistadas en el trabajo de campo.

En el marco de acciones de registro y control suelen presentarse la mayoría de eventos violentos y agresiones contra jóvenes por parte de agentes estatales. En campo se identificó un patrón común en este tipo de eventos: la detención de los jóvenes para realizar las requisas usualmente estaba acompañada de amenazas (los agentes mostraban sus armas de dotación de forma intimidatoria), retención ilegal de documentos personales y golpizas (Entrevista 1. Líder juvenil). Además, en algunos casos, los jóvenes eran transportados en patrullas o en vehículos civiles a zonas alejadas de la ciudad por parte de los policías (Entrevista 1. Líder Juvenil; Entrevista 2. Líder juvenil; Entrevista 5. Líder juvenil).

Las víctimas de estos hechos no parecen tener un perfil específico; frente a lo cual un entrevistado apuntaba que “Los jóvenes son objetivo de la Policía” (Entrevista 1. Líder juvenil). Sin embargo, un joven reportó que integrantes de la Policía realizaban prácticas intimidatorias contra líderes sociales en Bosa (Entrevista 5), y según una funcionaria, en muchos casos,

los jóvenes consumidores de droga en Suba son detenidos arbitrariamente en estaciones de Policía y CAI, a pesar de llevar consigo la dosis permitida legalmente (Entrevista 96).

Otro escenario de conflictividad y uso arbitrario de la fuerza por la Policía se configura en sitios públicos donde se concentran grupos grandes de jóvenes integrantes de culturas urbanas. Dos testimonios ilustran estos eventos:

La Policía llega con las motos a sacarlo a uno de los parques, a patearlo, con el bolillo, a desenfundar el revólver, a amenazarlos con que se lo lleva el camión de la UPJ; porque lo vieron fumándose un porro, fumándose un cigarrillo, porque le habló feo (...) (Entrevista 1. Líder juvenil)

(...) tratos arbitrarios de la Policía contra jóvenes que practican deportes extremos en las UPZ de Gran Yomasa y Danubio. Allí se congregan en los parques grupos de 40 ó 50 jóvenes que practican estos deportes, lo cual genera mucha tensión en la comunidad que llama a la Policía, y se presentaban choques y arbitrariedades. (Entrevista 95. Funcionario)

Finalmente, los jóvenes son afectados por “batidas” ilegales que realiza el Ejército en barrios populares. En campo se denunció que camiones provenientes del Meta y del Tolima detienen arbitrariamente a jóvenes, les retienen sus documentos personales y los llevan forzosamente a centros de entrenamiento militar, actuando en contra de las decisiones de la Corte Constitucional en esta materia (Entrevista 4. Funcionario; Entrevista 12. Funcionario).

3.3. Factores de riesgo y protección asociados a la violencia juvenil

3.3.1. Factores que incrementan la vulnerabilidad frente a la violencia organizada

Se identificaron 11 factores de riesgo asociados significativamente a la vulnerabilidad de los jóvenes frente a la posibilidad de involucrarse en dinámicas de violencia organizada en Bogotá. Con fines analíticos se agrupan estos factores en cuatro modelos explicativos que, cabe destacar, representan mejor la realidad de las zonas focalizadas de violencia que se señalaron en la pasada sección, dada la influencia que allí tienen los GVO.

3.3.1.1. Modelo I

En primer lugar, tienden a estar en un nivel alto de riesgo de optar por ser parte de GVO los jóvenes que afrontan la siguiente confluencia de factores: tiempo libre no ocupado en actividades productivas, familias disfuncionales y pares criminales.

Estos tres factores operan como una cadena de influencias que hacen más vulnerables a los jóvenes frente a la decisión de involucrarse en la violencia organizada y no son determinantes en sí mismos. Para comenzar, los jóvenes con exceso de tiempo libre “mal empleado”, ya sea por haber desertado del colegio o por no ocupar su horario extra-académico en actividades productivas y lúdicas son más proclives a frecuentar sitios públicos (p.e. parques y bares) donde se reúnen GVO y a entablar relaciones de amistad con integrantes de esos grupos.

Entonces, una vez los jóvenes establecen dichas relaciones tienden a estar mucho más expuestos a la oferta de involucramiento en actividades criminales y violentas por parte de sus pares³⁴. Según líderes entrevistados:

(...) hay muchos jóvenes que no hacen nada y se la pasan en el parque, siendo este el lugar que frecuentan distintos actores como barristas o ladrones, y es así como cada joven se va involucrando en estas actividades. (Entrevista 7)

Los espacios públicos son lugares que pueden poner en riesgo a los jóvenes, puesto que son espacios donde se pueden reunir con pares que pueden influenciarlos para que pertenezcan a diversos grupos (...) (Entrevista 2)

En esos escenarios los jóvenes son seducidos, y se les pregunta si quieren pertenecer o hacer vueltas con ellos. Los grupos invitan a cervezas, y en ocasiones regalan dinero, luego de esto, los mismos jóvenes piden trabajar con ellos. (Entrevista 3)

En términos generales, es previsible que los jóvenes que carecen de proyectos de vida, referentes positivos de conducta y entornos protectores sean más vulnerables a la oferta de actividades violentas que les plantean sus pares criminales (Entrevista 4. Líder juvenil).

En particular, el tercer factor es determinante. Cuando los jóvenes pertenecen a familias disfuncionales, donde carecen de figuras de autoridad y de patrones positivos de crianza, tienen una menor supervisión del manejo de su tiempo libre y de sus

relaciones sociales, lo que los puede hacer más influenciables por sus pares (Entrevista 18. Exagresor). Además, en hogares poco cohesionados y monoparentales (usualmente por la ausencia del padre) los jóvenes pueden buscar en GVO el entorno protector del cual carecen (Torres-Castro, 2013).

Los jóvenes en mayor riesgo son los que no tienen la figura paterna en sus familias; los jóvenes entrevistados con problemas de consumo de drogas o pertenencia a pandillas tendían a compartir esa característica: madres solas, de pronto pendientes de ellos, pero sin capacidad para atenderlos. (Entrevista 95)

La ausencia de los padres es impresionante; la mayoría de jóvenes que hemos entrevistado y que consumen drogas o se involucraron en una pandilla comparten la falta de presencia de sus padres. (Entrevista 96)

3.3.1.2. Modelo II

En un contexto de presencia de redes y grupos criminales que expenden y distribuyen droga, los jóvenes drogadictos suelen estar en un nivel alto de riesgo de involucrarse en GVO (Entrevista 96. Funcionaria; Entrevista 28. Funcionaria).

En efecto, la Defensoría del Pueblo (2013) documentó la forma como GPDP que controlan el microtráfico en Bosa y Ciudad Bolívar inducen a los jóvenes a la drogadicción para luego introducirlos en actividades criminales y violentas.

El mecanismo que describe esta entidad opera de igual forma para otros grupos y zonas de la ciudad: en una primera etapa, el vendedor de droga ofrece de forma gratuita una pequeña dosis de droga a los jóvenes con el fin de crear la adicción. Los jóvenes son abordados en parques públicos o en sus colegios (Defensoría del Pueblo, 2013). En ese sentido, según la Alcaldía de Bogotá, en 54 colegios públicos ubicados en Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe, Kennedy, Suba, San Cristóbal, Bosa y Los Mártires se presenta un alto riesgo de expendio y consumo de sustancias psicoactivas por parte de jóvenes y menores (CEACSC, s.f.).

La segunda etapa inicia una vez se ha creado la adicción en el joven, y ante la carencia de recursos para financiar su necesidad de consumo, el grupo le ofrece la oportunidad de articularse a la cadena del microtráfico como vendedor, usualmente en el mismo lugar donde fue contactado (Defensoría del Pueblo, 2013; Entrevista 11. Funcionario público). En ese punto, el adicto

puede articularse fácilmente a los GVO que controlan la venta de droga; “El mayor problema es el bazuco, cuando entran en una espiral de consumo es difícil que salgan de las lógicas delictivas” (Entrevista 3. Líder juvenil).

De igual forma, los jóvenes que han sido inducidos a la adicción pueden ser más propensos a decidir participar en actividades criminales como hurtos o asesinatos que realizan pandillas o bandas criminales, con el fin de satisfacer su necesidad de consumo (Perea, 2000). De hecho, el consumo de drogas es una práctica recurrente en jóvenes pandilleros y está asociada con la capacidad de realizar acciones riesgosas y temerarias (Perea, 2008; Entrevista 18. Exagresor).

3.3.1.3. Modelo III

Los jóvenes también pueden ser más propensos a vincularse a GVO cuando perciben una amenaza contra sus vidas en los entornos sociales a los que pertenecen y han entablado relaciones de amistad o afinidad con personas relacionadas con actividades criminales.

En campo se reportó que una de las razones que puede estar relacionada con la decisión de los jóvenes a involucrarse en la violencia organizada es la percepción de inseguridad en sus comunidades debido a la presencia y acciones de GVO, y a los riesgos contra su vida; “En un escenario de violencia y sobrevivencia, para estar bien tienes que volverte uno de ellos” (Entrevista 3. Líder juvenil); “Un factor de riesgo es la sensación de inseguridad en los barrios” (Entrevista 13. Líder juvenil). Además, son proclives a involucrarse a GVO, los jóvenes que quieren cobrar venganza por una afrenta sufrida; “La necesidad de venganza y de retaliación, en la mayoría de los casos violenta puede llevar al joven a querer pertenecer a estas bandas” (Entrevista 2. Líder juvenil).

Estos jóvenes pueden buscar satisfacer su necesidad de protección o venganza en los GVO; “Sobrevivir en esos entornos es difícil. Un factor de protección es vincularse a un grupo, ya sea pandilla o de identidad, y compartir. No necesariamente son pandillas, pueden ser subculturas urbanas” (Entrevista 14. Funcionaria). En ese sentido, según Ramos (2003) para los pandilleros es muy significativa la provisión de protección y la posibilidad de hacerse respetar a través de su participación en estas organizaciones. Otros autores encontraron que la búsqueda de respeto y estatus mediante la violencia son aspectos centrales para los jóvenes agresores (Pesca, et al., 2010; Perea, 2000). A su vez, el acceso a armas a través de estos grupos puede generar la percepción de “poder y seguridad” que estos jóvenes están buscando (Entrevista 18. Exagresor).

En ese contexto, las relaciones de amistad o afinidad con pares criminales operan como una influencia que favorece el involucramiento de los jóvenes

en estos grupos: ellos pueden facilitarle a los jóvenes los medios para contactarse con los grupos o pueden ser ellos quienes contribuyen a construir la percepción de seguridad por la pertenencia a estos grupos que tienen los jóvenes en riesgo.

3.3.1.4. Modelo IV

Finalmente, son vulnerables los jóvenes que provienen de familias disfuncionales en las que tienen que asumir el rol de proveedores de recursos, cuando han desertado del colegio, encuentran dificultades para conseguir trabajo y reciben ofertas económicas por parte de GVO.

La presión que reciben los jóvenes para iniciar su vida laboral a temprana edad por parte de sus padres, en un contexto de vulnerabilidad económica en sus hogares, es un factor de riesgo determinante para el involucramiento juvenil en la violencia organizada (Entrevista 47. Funcionario público). Esto se debe a que el rol de proveedores puede hacer a los jóvenes más propensos a participar activa o esporádicamente en actividades delictivas, ante la premura de las necesidades materiales que afrontan:

En algún momento es la problemática social: usted está un momento de su vida en que no hay con qué comer, y un grupo de amigos le dicen que lo acompañe a ‘capturar gente en la calle’, y usted para ayudar a su mamá lo hace... o el caso típico de algunos hogares en Ciudad Bolívar donde le dan de comer al niño agua de panela con papel periódico, pues usted va a caer, va a hacer algo en contra de su voluntad. (Entrevista 1. Líder Juvenil)

Frente a lo anterior, están en mayor riesgo los jóvenes que adicionalmente han desertado de su colegio y tienen dificultades para conseguir empleo (Entrevista 4. Líder juvenil). Al respecto, Perea (2000) encontró que la mayoría de pandilleros consultados en su trabajo de campo en San Cristóbal tenían varios rasgos en común: habían abandonado temporal o definitivamente el colegio; habían comenzado su vida laboral a muy temprana edad y no habían tenido estabilidad en un solo trabajo; y casi todos estaban en condición de desempleo.

El escenario de riesgo se completa cuando los jóvenes reciben ofertas de actividades ilegales por parte de GVO; “La condición de pobreza de los jóvenes los hace más propensos a participar en grupos armados, muchas veces es el argumento que usan los grupos para reclutarlos, ofreciéndoles mejor calidad de vida y mejores ingresos” (Entrevista 2. Líder juvenil). Según la Defensoría del Pueblo (2013) GPDP, bandas y pandillas ofrecen

dinero a los jóvenes para vincularlos a sus estructuras en zonas de Bosa y Ciudad Bolívar. En ese sentido, Ramos (2003) encontró que los pandilleros también ven a sus agrupaciones como un medio para conseguir recursos económicos.

Finalmente, en barrios con presencia de GVO los jóvenes están expuestos al modelo de vida de los integrantes de pandillas y bandas, lo cual los puede hacer más susceptibles de aceptar la oferta de estos grupos: “En ese sentido en el barrio se dan las dos lógicas, el joven que trabaja en cosas legales, y gana poco, y el que trabaja en las pandillas y gana más” (Entrevista 3. Líder juvenil).

3.3.2. Factores que incrementan la resiliencia frente a la violencia organizada

En materia de protección, es posible identificar dos conjuntos de factores que hacen más resilientes a los jóvenes frente a la opción de involucrarse en los GVO.

3.3.2.1. Modelo I

Los jóvenes que son beneficiarios de iniciativas de prevención de la violencia o que hacen parte de grupos y redes juveniles tienden a ser más resilientes frente a la decisión de involucrarse en la violencia organizada.

Lo anterior se debe, en primer lugar, a que esta clase de iniciativas y agrupaciones proveen alternativas a los jóvenes para la toma de decisiones frente a la violencia y la criminalidad (Entrevista 15. Líder juvenil; Entrevista 4. Líder juvenil; Entrevista 96. Funcionaria). En particular, ofrecen una amplia variedad de actividades que ocupan “positivamente” el tiempo libre de los jóvenes (en el ámbito cultural, deportivo, político, etc.), atacando un factor de riesgo clave frente a la vinculación a los GVO. Así mismo, muchas de estas actividades están diseñadas para formar habilidades que fortalecen el carácter de los jóvenes en la interacción con sus entornos (en lo laboral, educativo, sus derechos, etc.) (Entrevista 15. Líder juvenil).

En segundo lugar, con estas actividades y agrupaciones los jóvenes pueden construir referentes positivos de comportamiento entre sus pares y líderes, al tiempo que ellos mismos pueden desarrollar habilidades de liderazgo (Entrevista 18. Exagresor). Así, la formación en habilidades específicas, y la opción que tienen los jóvenes de conocer otros entornos y modelos de vida con estas experiencias, les brinda a los jóvenes la posibilidad de construir proyectos de vida diferentes a la violencia (Entrevista 15. Líder juvenil).

Los jóvenes que pertenecen a familias cohesionadas y con sistemas de autoridad funcionales tienen posibilidades de ser resilientes frente a la participación en actividades de violencia organizada, según las personas entrevistadas en terreno.

Estas familias operan como entornos protectores y redes de apoyo para los jóvenes, al tiempo que favorecen la formación de valores y referentes positivos de comportamiento, así como el control de su tiempo libre y sus relaciones sociales (Entrevista 3. Líder juvenil; Entrevista 47. Funcionaria; Entrevista 18. Exagresor).

3.3.3. Factores de riesgo de los jóvenes a ser víctimas de violencia

Se identificaron tres escenarios (representados en modelos explicativos) en donde operan factores que incrementan el riesgo de los jóvenes de Bogotá a ser víctimas de violencia por parte de GVO y otros agentes.

3.3.3.1. Modelo I

Tienden a estar en mayor riesgo aquellos jóvenes que realizan prácticas estigmatizadas en la comunidad (p.e. el consumo de drogas o la pertenencia a subculturas urbanas) en sitios públicos “peligrosos”, ya sea por la presencia de GVO y agentes que ejercen violencia contra los jóvenes, o por el desarrollo de actividades criminales en esos lugares.

Vale la pena iniciar con los colegios públicos y sus alrededores, puesto que en estos lugares se reúnen un gran número de amenazas que ponen en riesgo a los jóvenes de la ciudad. En efecto, la Alcaldía de Bogotá identificó 54 colegios oficiales en donde se presenta un grave riesgo para los estudiantes, la comunidad académica y los jóvenes en general, debido a la presencia de puntos de venta de droga en los alrededores de estos sitios, controladas por cerca de 200 bandas y pandillas (Marín, 2014), y por la existencia de redes dedicadas al tráfico de mujeres y niñas para la prostitución forzada (CEACSC, s.f.). Además, en campo se reportó que cerca a colegios públicos de localidades como Usme se reúnen y enfrentan barras violentas de fútbol (Entrevista 95. Funcionario público).

Así, en estos sitios los jóvenes enfrentan la amenaza de ser hurtados o agredidos físicamente por pandillas y bandas criminales; ser lesionados en el marco de los enfrentamientos entre GVO como las barras violentas; ser inducidos a la drogadicción y por esa vía ser reclutados forzosamente o vinculados a grupos criminales; e incluso, ser víctimas de prostitución forzada.

Otros lugares que representan un riesgo para los jóvenes son los parques públicos y las estaciones o Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía. Allí están en riesgo, sobre todo, aquellos jóvenes que realizan prácticas estigmatizadas por la comunidad, como el consumo de drogas o la pertenencia a culturas urbanas (Hip Hop, barristas, deportes extremos, etc.). Cabe recordar la forma como sectores de la comunidad, la Policía y algunos GVO estigmatizan estas prácticas juveniles y las consecuencias que esto tiene en términos de violencia juvenil.

Los parques son sitios peligrosos porque también son punto de encuentro de pandillas, bandas y barristas, así como de venta de droga (Pesca, et al., 2010; Entrevista 7. Líder juvenil; Entrevista 5. Líder juvenil). Allí los jóvenes con el perfil mencionado se enfrentan ante las mismas amenazas señaladas anteriormente (excepto la prostitución forzada), pero además están ante el riesgo de sufrir tratos arbitrarios por parte de la Policía. Así mismo, este lugar puede ser propicio para la ejecución de asesinatos en el marco de la limpieza social.

Por su parte, las estaciones y CAI de Policía representan un lugar de riesgo para los jóvenes con el perfil mencionado en zonas marginalizadas de la ciudad, puesto que allí pueden ser víctimas de agresiones, detenciones arbitrarias o amenazas. Frente a lo anterior, un líder entrevistado señalaba que jóvenes como él preferían “(...) cruzar la cuadra si veo de frente a un Policía, así en la otra cuadra esté lo que todo el mundo cree que podría ser un ladrón (...) no sé con qué me pueda salir el Policía” (Entrevista 1). Además, una funcionaria enfatizaba que estos sitios también son inseguros porque los jóvenes allí detenidos pueden sufrir arbitrariedades policiales y en esos lugares no hay control por parte de las autoridades civiles a la actuación de los agentes estatales (Entrevista 14).

3.3.3.2. Modelo II

Los jóvenes que tienen un perfil de liderazgo también pueden ponerse en un nivel alto de riesgo de ser víctimas de violencia, cuando por el ejercicio de sus acciones son percibidos por GVO como una amenaza para sus intereses estratégicos.

En particular, hay dos tipos de acciones que representan un mayor riesgo para los líderes juveniles. Primero, las denuncias o acciones públicas que buscan visibilizar las acciones de los grupos armados. Por ejemplo, como se mencionó en la parte de “Situaciones críticas”, líderes comunitarios y juveniles de Bosa y Ciudad Bolívar han estado en riesgo de ser amenazados y asesinados por GPDP que buscan evitar denuncias en su contra o tener más injerencia en espacios de toma de decisión de las comunidades (Torres, 2011; Defensoría del Pueblo, 2013).

Nosotros nos organizamos con miedo; hicimos una marcha de antorchas protestando por el asesinato de jóvenes por grupos paramilitares, pero teníamos miedo de que estuviera detrás la Policía y nos iba a tomar fotos y después esas fotos iban a aparecer en una lista negra. No sabíamos si había alguien infiltrado entre los parches juveniles identificando gente; quién es el líder, quién está gritando. (Entrevista 1. Líder juvenil)

Existe un amplio riesgo al ser líder comunitario. En ocasiones es complicado hablar de algunos temas a nivel local. No hay posibilidad de hacer una denuncia de paramilitarismo si la Policía está presente, puesto que también están inmersos dentro de ese contexto. Si la Policía está presente en donde se estén dando espacios para hablar de estos temas hay desconfianza y riesgo de ser violentado. (Entrevista 5. Líder juvenil).

Segundo, en ocasiones, el trabajo con jóvenes en zonas marginales por parte de diferentes entidades es percibido como un riesgo para los intereses de los GVO (Entrevista 28. Funcionaria). Así, esto se observa en el caso del microtráfico: “Los jóvenes funcionarios de organizaciones sociales o de entidades estatales que están metidos en trabajo con jóvenes pueden ponerse en riesgo en zonas como Comuneros –Usme-, porque al influenciarlos para que dejen el consumo, pueden afectar el mercado de grupos criminales” (Entrevista 95. Funcionario).

3.3.3.3. Modelo III

Aunque no es generalizado, las jóvenes y niñas que establecen relaciones sentimentales con integrantes de bandas y pandillas tienden a estar en riesgo. Ello se debe a que algunas de estas mujeres son inducidas por sus compañeros a la adicción a las drogas y por esa vía a la prostitución forzada:

(...) otro rol es el de ser las novias de los duros de las pandillas, el cual representa varios riesgos, ya que se les induce al consumo de sustancias y posteriormente a la adicción (...) de la adicción se pasa a la prostitución por migajas con tal de lograr conseguir lo mínimo para obtener bichas o drogas, y así controlar la ansiedad. (Entrevista 12. Funcionario)

Además, en ocasiones, estas mujeres son agredidas por pandilleros y miembros de bandas cuando terminan su relación sentimental con ellos e inician una nueva relación con otros hombres: “(...) si usted es novia de un ñero y él le termina y después la ve con otro, paila. Mejor dicho, ya se adueña de usted, así el esté con otra vieja” (Torres-Castro, 2013, p.343).

3.3.4. Factores de protección de los jóvenes a ser víctimas de violencia

Finalmente, la pertenencia a organizaciones y redes juveniles puede ser un factor de protección de los jóvenes frente al riesgo de ser víctimas de violencia.

Lo anterior tiene que ver con el grado de aceptación y reconocimiento que tienen algunas de estas organizaciones y agrupaciones en la comunidad, y entre los jóvenes agresores, cuando no son percibidos como una amenaza por parte de los grupos en los que ellos participan. Al respecto, vale la pena resaltar dos testimonios, el primero de un líder juvenil que era perseguido por integrantes de una pandilla hasta que ellos buscaron información sobre sus actividades y terminaron por aceptarlo; “hermano, nos equivocamos con usted, usted es un chino bien. Bacano que quiera ayudar a los pelados” (Entrevista 3. Líder Juvenil).

Ser un personaje visible en el barrio es un factor de protección y más si se está vinculado a alguna organización juvenil o cultural, ya que la pertenecía a estos colectivos no significa ningún riesgo hacia las pandillas en términos de retaliaciones violentas o de otro tipo. En otras palabras si las pandillas conocen las actividades de las personas, evalúan cuales representan un riesgo, en este sentido los líderes sociales, son valorados antes que victimizados en la localidad de Rafale Uribe. (Entrevista 8. Líder juvenil)

Además, las agrupaciones y redes juveniles construyen mecanismos de protección colectiva que apuntan a la identificación y comunicación de riesgos a sus participantes (Entrevista 7. Lideresa juvenil; Entrevista 4. Líder juvenil). Así, una funcionaria señalaba que los jóvenes más vulnerables frente a la violencia son aquellos que no tienen conexiones ni redes de apoyos como éstas (Entrevista 14).

3.4. Infraestructura de prevención de la violencia juvenil

3.4.1. Caracterización de la infraestructura

Bogotá es el caso de estudio con el mayor número de iniciativas de prevención de la violencia juvenil identificadas entre 2008 - 2014. La ciudad cuenta con 52 intervenciones locales y 50 más que hacen parte de programas nacionales o que se aplican al tiempo en varias ciudades del país, lo que representa el 51,7% del total de las iniciativas registradas (102 de 197).

La mayoría de las intervenciones son implementadas por entidades estatales (35 en solitario y 17 más en alianzas con otros sectores), seguidas de ONG nacionales e internacionales (16 en solitario y 9 en alianzas), fundaciones privadas (13 en solitario y 9 en alianzas), cooperación internacional (2 en solitario y 19 en alianzas) y alianzas entre varios de los anteriores sectores (32).

Así mismo, se observa una predominancia de las iniciativas directas de prevención de la violencia (Entrevista 5. Líder juvenil; Entrevista 21. Líder juvenil) frente a las indirectas³⁵. En el primer grupo, 46 de las intervenciones tienen entre otros objetivos las víctimas de la violencia juvenil, 36 apuntan a los posibles victimarios, 3 a los instrumentos (armas) con que se ejerce la violencia y ninguna a las instituciones que regulan esta materia.

Las principales entidades estatales que participan en la implementación de las iniciativas son la Alcaldía de Bogotá y sus diferentes entidades, el ICBF, el SENA, la Policía Nacional, el Ministerio de Educación y la Presidencia de la República. Este tipo de intervenciones abordan una amplia variedad de temáticas y han priorizado las zonas de concentración de violencia juvenil (Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Suba, Usaquén, Los Mártires, entre otras localidades).

Las de carácter indirecto hacen hincapié en la formación de habilidades en los jóvenes para que sean agentes positivos de cambio en sus comunidades; en la inclusión de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad a través de ofertas educativas e inserción laboral; en la atención de factores de riesgo mediante la prevención del trabajo infantil y del consumo de drogas; y en la provisión de actividades lúdicas a jóvenes como una forma de ocupación de su tiempo libre.

Las iniciativas directas pueden agruparse en tres clases: (1) las que buscan prevenir la violencia a través de la formación de habilidades en los jóvenes en relación con sus derechos y deberes, la transformación de conflictos y la creación de una cultura de paz. (2) Las que apuntan a la creación y fortalecimiento de entornos protectores: el colegio, a partir de la prevención de la violencia escolar, el consumo de drogas y la violencia sexual; el hogar, mediante la prevención de la violencia intrafamiliar; y las casas de juventud y los clubes juveniles, que ofrecen actividades lúdicas a los beneficiarios. (3) Las que se dirigen a jóvenes pandilleros (p.e. Programa Trapecistas), barristas (Goles en paz), o adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal; así como a la prevención del reclutamiento y vinculación de jóvenes por parte de GVO (v.g. Mambrú no va a la guerra).

Entre las ONG que implementan las intervenciones en Bogotá se destacan la Cruz Roja Colombiana, la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA por sus siglas en inglés), la Fundación Artística y Social la Familia Ayara

(Entrevista 5. Líder juvenil; Entrevista 21. Líder juvenil) y la Corporación Movimiento por la Vida. Estas iniciativas hacen énfasis en dos aspectos: (1) en el uso de culturas urbanas (en particular, el Hip Hop) como plataforma para la capacitación de jóvenes en derechos humanos, la PPJ, prevención del consumo de drogas, violencia intrafamiliar, entre otros temas. (2) En el fortalecimiento y acompañamiento de organizaciones juveniles en lo concerniente a su incidencia en políticas públicas, defensa de los derechos juveniles, participación activa y positiva en la comunidad, y prevención de la violencia juvenil.

Otras iniciativas apuntan, como en el caso de las estatales, a la inclusión social de jóvenes en situación de vulnerabilidad (p.e. habitantes de calle), a través de ofertas laborales y educativas; así como a la prevención de la violencia de género, la explotación sexual de menores, y el reclutamiento y vinculación de jóvenes por parte de GVO. En particular, esta última iniciativa se implementó con un enfoque de construcción de redes, lo que, a su vez, tuvo como resultado el fortalecimiento de organizaciones juveniles y la realización de acciones colectivas en contra de hechos violentos relacionados con la limpieza social en Ciudad Bolívar y Bosa.

Las fundaciones que implementan iniciativas de prevención de la violencia juvenil hacen parte del sector privado, específicamente de las empresas Ecopetrol, Bancolombia, BBVA, General Motors, Chevrolet y Terpel. También se destacan la Fundación Restrepo Barco y la Fundación Imago. Estas intervenciones tienden a ser indirectas y se enfocan en la inclusión de jóvenes, a través de su formación laboral y empoderamiento como emprendedores sociales, lo que a veces va acompañado de programas de contratación por parte de los patrocinadores.

Así mismo, hay un fuerte énfasis en la educación, por medio de la financiación de programas de becas de educación superior, el fortalecimiento de la calidad de la educación básica y la prevención de la deserción escolar, y actividades de refuerzo escolar. Este sector también es líder en la implementación de programas de prevención de la violencia escolar y en la formación de habilidades en los estudiantes en resolución de conflictos (p.e. Aulas en Paz y Hermes).

Finalmente, se utilizan prácticas deportivas, en especial el fútbol, para la ocupación positiva del tiempo libre de los jóvenes, y la prevención del reclutamiento forzado, la violencia juvenil y la violencia de género.

Entre las agencias de cooperación internacional se destacan GIZ de Alemania, AECID de España y USAID de Estados Unidos. También tienen protagonismo agencias de las Naciones Unidas como UNICEF, ACNUR,

UNODC, OIM, PNUD, BID y Banco Mundial. Estas agencias operan como financiadores de las iniciativas, que son implementadas por otros agentes en el marco de alianzas. Sólo en dos casos, agencias de cooperación internacional han implementado por sí mismas las iniciativas: en un programa de formación de habilidades empresariales y en una intervención enfocada en el fortalecimiento de entornos protectores.

Finalmente, en la ciudad se observa un número importante de iniciativas de base de difícil caracterización por la falta de información disponible sobre sus actividades, objetivos y resultados alcanzados. No obstante, un indicador aproximado del volumen de estas intervenciones lo aporta la cantidad de organizaciones, colectivos y parches juveniles, así como ONG que trabajan en temas de juventud en la ciudad. En el año 2009, la Alcaldía de Bogotá registró 995 de estas organizaciones, la mayoría de ellas concentradas en Ciudad Bolívar (109), Usaquén (109), San Cristóbal (105), Kennedy (89) y Bosa (70) (Entrevista 1. Líder juvenil; Entrevista 13. Líder juvenil; Entrevista 14. Funcionaria pública).

Las iniciativas comunitarias operan en red, con el apoyo de cooperación internacional, ONG y el Estado (Entrevista 1. Líder juvenil), y tienen un alcance importante en los barrios y las localidades de su procedencia.

Recuadro 3. Principales actividades de las iniciativas comunitarias

1. Formación en política, derechos humanos, memoria histórica, etc., con el objetivo de construir sujetos proactivos en la comunidad, y creación de nuevos espacios de participación (v.g. las Juntas de Acción Juvenil en Kennedy). Varios de los beneficiarios de estas iniciativas han participado en espacios formales, como el CDJ o las JAC (Entrevista 5. Líder juvenil; Entrevista 21. Líder juvenil).

2. Creación de espacios construcción de acuerdos entre diferentes sectores para mejorar la convivencia. Entre ellos se destacan los pactos de paz entre barras y entre pandilleros; y los escenarios de acercamiento entre jóvenes y Fuerza Pública, que han tenido el propósito de mitigar y cambiar las relaciones de desconfianza entre estos sectores (Entrevista 1. Líder juvenil; Entrevista 13. Líder juvenil; Entrevista 14. Funcionario público).

3. Fomentan la afinidad por culturas urbanas (p.e. el Hip Hop), y desde allí llevan a cabo capacitaciones en temas políticos, convivencia, prevención de consumo de drogas, etc. Se destaca el trabajo de Busthak Records, Hip Hop Pazur, Urban Clan o Casa Blanca (Entrevista 9. Líder juvenil; Entrevista 15. Líder juvenil. Entrevista 7. Líder juvenil).

4. Acciones colectivas contra problemáticas que afectan a los jóvenes: la “Noche sin miedo”, campaña para que los jóvenes se apropien de los territorios y rompan las fronteras y los horarios impuestos por GVO; las tomas de barrios con actividades lúdicas, festivales culturales (p.e. el de Chucua de la Vaca, Kennedy) y Carnavales (v.g. el que lidera el Colectivo Mitchell); y la participación en campañas de entrega de armas (Entrevista 8. Líder juvenil. Entrevista 1. Líder juvenil. Entrevista 12. Funcionario público).

3.4.2. Efectividad de la infraestructura

En Bogotá se presenta una situación ambivalente en torno a las iniciativas de prevención de la violencia juvenil. Si bien la infraestructura de prevención es robusta, dado el diseño y ejecución positiva de la política pública de juventud (PPJ), la oferta considerable de iniciativas frente a la problemática, la priorización acertada de las poblaciones objetivo de estos programas, y la atención de varios de los principales factores de riesgo; la efectividad de estas intervenciones es moderada para evitar la continuidad del fenómeno.

Prueba de ello es que, durante el período de estudio, la violencia juvenil se ha caracterizado por una dinamización y reactivación (no necesariamente un recrudecimiento), así como por su persistente concentración en zonas marginales de la ciudad, como se explicó a lo largo del capítulo.

A continuación se presentan los alcances y limitaciones de la PPJ, así como de las intervenciones estatales y de los demás los sectores.

En cuanto al Estado, Bogotá es pionera en la implementación de una PPJ, con la expedición del Decreto 482/2006 (gobierno Garzón 2004 - 2008) que reglamentó la política y el Decreto 299/2011 (gobierno Moreno 2008 - 2012) que instauró el sistema distrital de juventud. Este marco institucional permitió un avance en la atención de los jóvenes (Jiménez, 2011), dado que la Subdirección de Juventud de la Secretaría de Integración Social quedó a cargo de la dirección del sistema, y así, normativamente, se enmarcó esta temática en la política social del Distrito. Ello permitió hacer una aproximación a la violencia juvenil desde la prevención, y no sólo desde la represión, como sería la perspectiva de una entidad a cargo de la seguridad (p.e. la Secretaría de Gobierno).

Además, y en línea con lo anterior, la política se diseñó con un enfoque de derechos, cuya finalidad es la construcción de las condiciones efectivas para la satisfacción de los derechos de los jóvenes (Jiménez, 2011: 93). Así, unos de las prioridades de las administraciones Garzón y Moreno fue abordar

la violencia juvenil, en términos preventivos, a partir de la creación de oportunidades laborales y proyectos de vida para los jóvenes, y el fortalecimiento de la inversión social del Estado en zonas periféricas y marginales (Ávila, 2014). Como resultado, en los últimos años se ha observado una mejora en la cobertura de educación, seguridad alimentaria y salud de los jóvenes de la ciudad (Jiménez, 2011).

Finalmente, se impulsó y estableció un marco normativo al Consejo Distrital de Juventud (CDJ), creados en el Acuerdo 33/2001 de la administración Mockus (2001 - 2003), que han ofrecido a los jóvenes espacios formales de participación en las decisiones que les competen de política pública en la ciudad.

Pese a estos avances, la ejecución de la política ha perdido ritmo y se han identificado falencias en el esfuerzo de las entidades estatales en la prevención de la violencia juvenil. En primer lugar, se ha presentado un proceso paulatino de “securitización” del tema de juventud; de tal forma que, en la práctica, la PPJ se ha subordinado a la política de seguridad y no a la política social. En otras palabras, ha predominado el componente represivo frente a la violencia juvenil por encima del preventivo (Jiménez, 2011). Ello ha conducido a una criminalización de los jóvenes de sectores populares de Bogotá por parte del Estado y a la ejecución de “acciones tendientes a proteger a los jóvenes frente a la violencia y a protegerlos de ellos mismos” como los “toques de queda” (Jiménez, 2011, p.80).

Adicionalmente, en la administración Petro (2012 a la fecha) se ha observado una pérdida de liderazgo en la conducción de la PPJ por parte de la Secretaría de Integración Social (Entrevista 14. Funcionaria). En parte, esto se debe a tres factores: (1) el recorte del presupuesto de la política, que se evidencia en recursos financieros y humanos insuficientes, así como en una menor inversión en lo social (Entrevista 96. Funcionaria). (2) El traslado de rubros que pertenecían a la Subdirección de Juventud hacia el IDIPRON, en detrimento de las demás entidades del sistema (Entrevista 14. Funcionario público). (3) El recurrente cambio de liderazgo en la Subdirección de Juventud (Entrevista 95. Funcionario).

A ello se añaden dificultades en la articulación de las entidades que implementan las iniciativas de prevención de la violencia juvenil. Según funcionarios entrevistados, esto se evidencia en dos niveles: por un lado, entre la Policía y la Secretaría de Integración Social, dada la mutua desconfianza entre los funcionarios de dichas entidades (Entrevista 12; Entrevista 14). Por otro lado, entre el nivel distrital y el local, en lo concerniente a la planificación y retroalimentación de las acciones (Entrevista 95)³⁶.

En segundo lugar, se han identificado falencias en el funcionamiento del CDJ. Este mecanismo pasó de generar un amplio entusiasmo a ser motivo de escepticismo entre los jóvenes. Según un funcionario, “Los consejos locales de juventud son un espacio muy deslegitimado, en el cual, si acaso, participa el uno por ciento de los jóvenes” (Entrevista 95). No obstante, tanto esta persona como otra funcionaria resaltan que actualmente los consejeros son muy activos en sus localidades, pero las funciones que ejercen superan con creces sus capacidades, por lo que se encuentran muy desgastados (Entrevistas 95; Entrevista 96).

En particular, las falencias del CDJ obedecen a la falta de acompañamiento a este proceso por parte del Estado, en tres ámbitos: seguridad, dado que en este momento 3 consejeros están amenazados por el ejercicio de sus funciones (Entrevista 95. Funcionario); recursos, ya que algunos de estos jóvenes ejercen sus funciones con su propio dinero (aún si provienen de zonas marginales de la ciudad) y son superados en tiempo y formación técnica y política (Entrevista 96. Funcionaria); y en dirección, “(...) no hay un liderazgo desde arriba que coordine el trabajo de los consejeros” (Entrevista 96. Funcionaria).

Por último, en la administración Moreno se presentó un serio retroceso en uno de los principales resultados de la política de juventud: los espacios de participación juvenil y la oferta estatal en alimentación, educación y salud. En esos ámbitos se presentaron problemas de clientelismo y mala administración de recursos; lo que explica el replanteamiento de la política en términos de recursos y funciones por parte del actual gobierno distrital (Ávila, 2014) (Entrevista 95. Funcionario).

Por su parte, las iniciativas comunitarias, de ONG y de fundaciones privadas, también presentan limitaciones. En ese sentido, personas entrevistadas resaltaban casos de clientelismo entre algunas organizaciones y funcionarios públicos:

Hay dispersión de recursos a estas organizaciones, hay relaciones y vínculos políticos con los alcaldes y dispersión de actividades que hacen trabajo juvenil. La contratación es un elemento de dispersión. Este ha sido el problema de la mesa juvenil (...) Las organizaciones se alinean con JAC y ediles para votar por candidatos y tramitar proyectos a su favor. (Entrevista 4. Líder juvenil)

Además, se observa una fuerte competencia entre las organizaciones por acaparar los espacios de interlocución con el Estado (Entrevista 31. Funcionario).

La participación de los jóvenes es muy vertical, se limita a lo que hacen los ‘juventólogos’ u organizaciones juveniles fuertes (...) Las organizaciones que conocen mejor las alcaldías, que saben cómo participar en los cabildos juveniles y los encuentros ciudadanos usualmente son las organizaciones comunitarias más grandes y más experimentadas que dejaron de hacer proyectos para los jóvenes y la cultura. Hay un interés mayor por la plata. Entonces hay una respuesta desde los jóvenes: ¿por qué no participan los jóvenes en esas actividades?, no nos llaman los políticos. (Entrevista 4. Líder juvenil)

Esto genera conflictos entre las organizaciones juveniles “Las relaciones entre organizaciones sociales, comunidad y partidos políticos minan las relaciones sociales” (Entrevista 4. Líder juvenil). A su vez, dificulta el trabajo en red y el establecimiento de acuerdos colectivos juveniles (Entrevista 96. Funcionaria).

Mientras que un sector de las organizaciones compite por los espacios de interlocución con el Estado, e incluso se involucra en prácticas clientelistas, otro sector se inclina por la desconfianza y el pragmatismo frente a las intervenciones estatales (Entrevista 1. Líder juvenil). En particular, la desconfianza de un amplio sector de los jóvenes frente al Estado tiene relación con varios hechos: los casos de corrupción y clientelismo ya señalados; la mutua prevención entre integrantes de la Fuerza Pública y los jóvenes; y la percepción que tienen algunos colectivos juveniles de estar siendo usados por parte de funcionarios y entidades más interesados en completar sus metas numéricas (registro de las listas de asistentes) que en el desarrollo de los procesos (Entrevista 14. Funcionaria).

Esta situación dificulta el trabajo conjunto de los colectivos y ONG comunitarias con el Estado (Entrevista 96. Funcionaria). Pero no sólo esto, además, se observan otras dos obstáculos en la articulación de estos sectores: Primero, distintos líderes juveniles rechazan el enfoque de algunas iniciativas estatales, impuestas “desde arriba” a las organizaciones, en tanto consideran que un modelo de intervención exitoso debe tener en cuenta el conocimiento de las realidades y necesidades de los jóvenes que tienen las organizaciones (Entrevista 15; Entrevista 3)³⁷. Sin embargo, cabe aclarar que una parte de las iniciativas estatales, de fundaciones privadas y de cooperación internacional sí tienen un componente de “abajo hacia arriba”, como se mencionó en la caracterización.

Segundo, otro obstáculo tiene que ver con la forma como operan estos sectores: “Los procesos institucionales desgastan mucho a las organizaciones sociales. Mientras que las organizaciones tienen un ritmo más ‘tranquilo’,

las entidades siempre están corriendo, y eso rompe los procesos” (Entrevista 96. Funcionaria).

Finalmente, el alcance y los resultados de las intervenciones comunitarias en la prevención de la violencia juvenil también se ven limitados por otros aspectos, como (1) las tensiones que tienen las organizaciones juveniles con otras formas de liderazgo en la comunidad (p.e. las JAC y las JAL) (Entrevista 95. Funcionario; Entrevista 1. Líder juvenil); (2) la falta de recursos que afecta la sostenibilidad de los procesos; (3) las dificultades que tienen para administrar de forma transparente los recursos públicos; y (4) la falta de relevo generacional al interior de las organizaciones (Entrevista 96. Funcionaria; Entrevista 1. Líder juvenil).

3.5. Conclusiones

La violencia juvenil en Bogotá ha sido un fenómeno persistente en el tiempo y focalizado en zonas marginales y periféricas de la ciudad. No obstante, en término agregados, esta problemática ha tenido una intensidad moderada, si se compara con otros casos de estudio como Cali y Medellín. Esto se debe principalmente a las características del crimen organizado y las condiciones de seguridad en la ciudad, dada la ausencia de grandes organizaciones criminales (carteles o grupos del conflicto) que se disputen su control.

El posicionamiento de Bogotá en los circuitos del crimen organizado colombiano no ha cambiado la situación descrita más atrás, pero, de todos modos, sí ha dinamizado y reactivado la violencia juvenil; vía la entrega de armas, la articulación en el negocio del microtráfico y la subcontratación de bandas criminales, pandillas y, en menor medida, barras violentas por parte de organizaciones al servicio del narcotráfico y, marginalmente, GPDP.

Hasta el momento, esta situación no ha significado un incremento notable de los niveles de violencia juvenil, pero plantea serios desafíos en términos de prevención de este fenómeno. En particular, puede conducir a una mayor articulación entre GVO con alta participación de jóvenes y grupos criminales con una estructura organizativa más compleja y con mayores recursos para el ejercicio de la violencia; así como puede favorecer la absorción directa de un mayor número de jóvenes por parte de estos grupos. De igual forma, esto puede dificultar los esfuerzos que se han dirigido para mitigar y prevenir el fenómeno en las zonas focalizadas donde se concentra.

Por lo tanto, una de las primeras acciones a implementar para afrontar esta amenaza es finalizar el proceso de revisión de la política de juventud

por parte de la administración distrital y darle un nuevo impulso a su implementación. Ese proceso de ajuste sería exitoso si lograra crear mecanismos para blindar la política de juventud de prácticas clientelistas y de corrupción, y, al tiempo, recogiera las lecciones positivas que se identificaron en las pasadas administraciones en el manejo de la violencia juvenil.

Entre ellas se destacan la focalización de los esfuerzos institucionales en zonas y poblaciones específicas de la ciudad; el diseño de un enfoque de prevención desde la inversión social del Estado y la creación de oportunidades de vida para los jóvenes en riesgo; y la articulación con otros sectores, en especial las organizaciones de jóvenes.

En relación con lo anterior, el Plan 75/100 puede ser un marco institucional efectivo si se intervienen los sitios de concentración de la violencia e inseguridad de la ciudad, no sólo con las medidas necesarias de represión a la criminalidad, sino también con esfuerzos paralelos en prevención de la violencia juvenil e inversión social.

En todo caso, las acciones estatales en prevención de la violencia juvenil tienen que ir encaminadas a evitar un mayor grado de vinculación de las agrupaciones juveniles violentas, aunque no exclusivamente criminales, en las dinámicas del microtráfico y la criminalidad organizada. En otras palabras, el Estado es más efectivo en este ámbito en la medida que logre prevenir el tránsito de pandillas y barras violentas en bandas criminales.

Por su parte, otra estrategia para afrontar los riesgos que plantea este escenario es sostener el carácter robusto de la infraestructura de prevención de la violencia juvenil. Como se mencionó en el análisis de los factores de riesgo y protección, las intervenciones de los diferentes sectores han provisto a los jóvenes con mecanismos que fortalecen su resiliencia frente a la opción de vincularse a la violencia organizada.

En línea con esto último, las iniciativas pueden continuar focalizándose en la atención de riesgos como el consumo de drogas por parte de los jóvenes, la ocupación positiva de su tiempo libre y la prevención del trabajo infantil, factores de riesgo significativos en la vinculación de jóvenes a grupos armados en Bogotá.

De igual forma, deben incrementarse las acciones conjuntas para blindar a los colegios públicos y privados de las amenazas a la seguridad e integridad de los jóvenes que allí se presentan en zonas focalizadas de la ciudad; sobre todo frente a la violencia de pandillas, la venta de drogas, el reclutamiento forzado y la explotación sexual de niñas y mujeres.

Así mismo, los diferentes sectores relacionados con la infraestructura de prevención de la violencia juvenil pueden fortalecer o, incluso, crear nuevos espacios de encuentro entre comunidades, jóvenes y Fuerza Pública, con el objetivo de reducir la desconfianza entre estos actores y, de esa forma, prevenir arbitrariedades y abusos por parte de agentes estatales contra los jóvenes.

Por su parte, otra estrategia para afrontar los riesgos que plantea este escenario es sostener el carácter robusto de la infraestructura de prevención de la violencia juvenil. Como se mencionó en el análisis de los factores de riesgo y protección, las intervenciones de los diferentes sectores han provisto a los jóvenes con mecanismos que fortalecen su resiliencia frente a la opción de vincularse a la violencia organizada.

En línea con esto último, las iniciativas pueden continuar focalizándose en la atención de riesgos como el consumo de drogas por parte de los jóvenes, la ocupación positiva de su tiempo libre y la prevención del trabajo infantil, factores de riesgo significativos en la vinculación de jóvenes a grupos armados en Bogotá.

De igual forma, deben incrementarse las acciones conjuntas para blindar a los colegios públicos y privados de las amenazas a la seguridad e integridad de los jóvenes que allí se presentan en zonas focalizadas de la ciudad; sobre todo frente a la violencia de pandillas, la venta de drogas, el reclutamiento forzado y la explotación sexual de niñas y mujeres.

Así mismo, los diferentes sectores relacionados con la infraestructura de prevención de la violencia juvenil pueden fortalecer o, incluso, crear nuevos espacios de encuentro entre comunidades, jóvenes y Fuerza Pública, con el objetivo de reducir la desconfianza entre estos actores y, de esa forma, prevenir arbitrariedades y abusos por parte de agentes estatales contra los jóvenes.

Por último, estos mismos actores tienen que tomar decisiones coordinadas y oportunas para prevenir y mitigar los asesinatos y las amenazas de jóvenes en el marco de las campañas de limpieza social. Ello debe incluir el establecimiento de acuerdos de no participación en este tipo de hechos por parte de la comunidad y la Fuerza Pública de las zonas marginales de la ciudad donde se presentan este tipo de problemáticas.